



TOMÁS GONZÁLEZ
Exministro de
Minas y Energía

OPINIÓN

¿Qué hay detrás de los recientes aumentos en el precio del gas?

En un mundo tan politizado, solo hay una manera de saber si a uno no le están diciendo la verdad: pedir la evidencia.

Eso exactamente es lo que hay que hacer con la respuesta del Gobierno al aumento en los precios del gas anunciado por empresas como EPM, Vanti o Alcanos en los últimos días. Según el Presidente, “hay suficiente gas para la demanda nacional” y lo que está ocurriendo es “una labor especulativa para elevar precios artificialmente que debe ser investigada”. ¿Es eso cierto?

La respuesta es no. Desde la campaña de 2022, el actual presidente dejó claro que su intención era marchitar los hidrocarburos lo más rápido posible y anunció que no daría nuevas licencias para la exploración y que prohibiría el desarrollo de proyectos *offshore*. Empezado el gobierno, la ministra de Minas publicó un informe de reservas para justificar la negativa a firmar nuevos contratos, que engañosamente indicaba que teníamos gas asegurado hasta 2037. El informe fue desmentido públicamente por la propia viceministra, quien terminó renunciando en medio del bochornoso episodio. Más adelante, el presidente de Eco-

petrol prendió las alarmas en marzo al decir que la declinación de los campos de producción y la incapacidad para aumentar las reservas finalmente nos habían alcanzado: a partir de 2025 no podríamos atender la totalidad de la demanda con nuestro propio gas. Afirmó que tendría la tercera parte de la demanda en 2027, y que solo a final de la década recuperaríamos la autosuficiencia con la entrada de los proyectos *offshore* en el Caribe. También trató de dar un parte de tranquilidad asegurando que los faltantes podríamos cubrirlos con gas de Venezuela.

Unos meses después, quince empresas de la cadena enviaron una carta al ministro alertándolo sobre el inminente déficit para 2025 dada la limitada oferta que públicamente habían anunciado los productores. La carta, una de múltiples enviadas a la Creg y a la Superintendencia de Servicios Públicos, advertía sobre el tamaño de los faltantes de gas y sus consecuencias en precios, y proponía acciones para mitigar los impactos.

Finalmente, en septiembre, cuando llegó el momento que la regulación establece para la compra y venta de

gas en el mercado primario, las ofertas de gas nacional nunca llegaron. La Creg inclusive extendió el plazo ante los anuncios de algunos productores, pero el gas del que hoy habla el Gobierno nunca apareció. Las empresas no tuvieron entonces opción distinta a comprar gas importado, el único que les ofrecía la firmeza exigida por la regulación para atender a hogares y pequeños negocios. El problema es que su precio es muy superior al que tradicionalmente han pagado por el gas. Empresas como Vanti, a la que se le vencía en diciembre casi la tercera parte de sus contratos, tuvo que comprar gas importado tres veces más caro que el nacional y traerlo de la costa Caribe al doble del precio que pagaba por traerlo de los campos del interior. Estos son los números que explican los aumentos de hasta 40 % que se han visto en los últimos días.

¿Es esta evidencia consistente con una historia de acaparamiento o con una de escasez? Apunta a un mercado al que se le está acabando el gas barato y que pasó a depender del importado; a un gobierno que a pesar de las advertencias se durmió en su antipatía por los hidrocarburos y su desconfianza en el sector privado; y

a un presidente que se resiste a tener una Creg completa, con comisionados independientes que puedan tomar medidas oportunas como se lo han ordenado las cortes.

Desafortunadamente, no hay mucho que hacer en el corto plazo. Pero deberíamos arrancar por decirle a la gente la verdad. Las investigaciones no generan gas. No tenemos alternativa distinta de apoyar decididamente los proyectos *offshore* y la expansión de la capacidad de importación; de enfrentar la realidad de que el 80 por ciento de nuestra oferta está en manos de Ecopetrol; de evaluar si hay excedentes de reinyección y autoconsumo que puedan llevarse al mercado, y de permitir que la demanda regulada se atienda con gas de menor firmeza y que los mayores precios se distribuyan entre más tipos de consumidores para proteger a los más vulnerables.

Y qué bueno sería también que los que le dijeron no al *fracking* sin dejarlo evaluar les expliquen a los que está subiendo su factura por qué renunciamos a un gas que podía estar listo en la mitad del tiempo que el *offshore* y costar la tercera parte de lo que pagamos hoy por el importado.